

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-29421-2019
CARATULADO : PERALTA/FISCO DE CHILE CDE

Santiago, siete de Marzo de dos mil veintidós

VISTO:

Comparece **LUIS PÉREZ CAMOUSSEIGHT**, abogado, domiciliado en Pasaje Dr. Sótero del Río N° 326, oficina N° 707, comuna de Santiago, en nombre y representación de **JORGE ALBERTO PERALTA GUERRA**, soltero, pensionado, cédula nacional de identidad número nueve millones trescientos sesenta y dos mil ciento once guión cinco, domiciliado en Parcela Nro. 5, Yancay, comuna de San Pedro, quien interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del **FISCO DE CHILE**, representado -en su calidad de Presidenta del Consejo de Defensa del Estado- por doña María Eugenia Manaud Tapia, abogada, ambos domiciliados en Santiago, Agustinas 1687, edificio Plazuela de Las Agustinas, comuna de Santiago.

Funda el ejercicio de la demanda en los hechos que relata y que constan en el registro de la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech II N° 6.653, según el cual el actor, nacido el 11 de Junio de 1963, de actuales 56 años de edad, está reconocido como preso político. A la fecha de ocurrencia de los hechos era militante del Partido Comunista y dirigente campesino y detenido en la vía pública en la ciudad de Santiago, donde se encontraba para participar de una reunión sindical, el día 11 de Julio de 1988 a la salida del Metro Estación Central por carabineros y civiles, requerido por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado y trasladado a la Tercera Comisaría de Carabineros, lugar donde fue sometido a interrogatorio y torturado con golpes de pies y puños y culatazos en distintas partes de su cuerpo.

Luego de ser interrogado por la Ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago doña Raquel Camposano el día 16 de



Julio de 1988 fue ingresado a la Penitenciaría, quedando en libertad el día 20 de Julio de 1988.

Producto de las torturas sufridas padece de trastorno de estrés post traumático, crisis de pánico y depresión y todavía siente terror por lo vivido lo que se desprende, inequívocamente, un perjuicio tanto psíquico, como físico provocado por el Estado de Chile durante el periodo del gobierno dictatorial. Los daños físicos y psíquicos tienen carácter de permanentes, pues aunque hayan transcurrido más de cuarenta años de lo sucedido la persona continúa con secuelas producto de la privación de libertad y las distintas torturas a las que fue sometido, daños que sufrió como víctima de tortura.

Expone al efecto, jurisprudencia del daño moral, señala que se hace patente por sí mismo en atención a los hechos, es decir, salta a la vista de lo evidente que es. Las angustias, padecimientos y dolores, sumadas a las incertidumbres, miedos, inseguridades, son fáciles de entender en su plenitud, y sólo cabe al sentenciador hacer una estimación fundada de su magnitud y del monto de la reparación.

Por todo ello, que demanda al Fisco de Chile, por daño moral, como consecuencia directa del secuestro y torturas de que fue objeto, el pago de doscientos millones de pesos (\$200.000.000), suma que debe ser pagada con reajustes de acuerdo al IPC e intereses legales desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago, más las costas del juicio; o en su defecto el monto indemnizatorio que se estime de conformidad con su apreciación y valorización del daño.

Respecto de los hechos delictuosos narrados es civilmente responsable el Estado de Chile, ya que a quienes se acusa su autoría, a la fecha de su comisión, eran miembros del Ejército de Chile y de otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública o civiles adscritos a las mismas, quienes se encontraban revestidos de autoridad pública.

El Estado de Chile ha reconocido expresamente su



responsabilidad en la práctica de secuestro y tortura ocurrida durante la dictadura militar, mediante distintos actos e instrumentos jurídicos, entre ellos cabe destacar el Informe emitido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y el Informe sobre Prisión Política y Tortura, denominado "Informe Valech". En efecto, en el mencionado Informe Valech, fue reconocido como víctimas de prisión política y tortura. En cuanto al derecho refiere que el Estado de Chile ha reconocido expresamente su responsabilidad en la práctica de secuestro y tortura ocurrida durante la dictadura militar, mediante distintos actos e instrumentos jurídicos, entre ellos cabe destacar el Informe emitido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y el Informe sobre Prisión Política y Tortura, denominado "Informe Valech". La responsabilidad del Estado, emana en primer lugar de un principio general de derecho administrativo que obliga a responder al Estado por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas que no se encuentran obligadas a soportarlos.

Añade en su demanda que la acción de derecho público para exigir la responsabilidad del Estado por actos u omisiones por las cuales se ha producido daño a personas que no se encuentran sujetas a sufrir el gravamen de soportarlos por atentar, a la igual repartición de las cargas públicas, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, según la doctrina unánime de los autores iuspublicistas, es imprescriptible. A mayor abundamiento, la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores también ha recogido la inaplicabilidad de las reglas del Título XXXV del Libro IV del Código Civil y, por ende, de las reglas en materia de prescripción.

En suma, las normas en materia de prescripción que contempla el Código Civil para los delitos y cuasidelitos no resulta aplicable a los procesos en que se persiga la responsabilidad extracontractual del Estado, ya que también existen las normas de derecho público que rigen la responsabilidad del Estado como son los preceptos



citados de la Constitución de 1925. Ergo la acción que se ejerce en estos autos es imprescriptible.

Por su parte ya es un hecho pacifico el deber del estado de indemnizar los daños causados por sus órganos en el ejercicio de sus funciones en virtud de lo dispuesto en la a Constitución Política de 1925, las Actas Constitucionales y la Constitución de 1980, su responsabilidad extracontractual también emana de la acción de indemnización contemplada en los artículos 4 y 44 de la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado que consagran la responsabilidad del Estado por falta de Servicio, normas en la que se hace responsable al Estado por los daños que causen los órganos de la Administración, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado.

Atendido además que los hechos generadores de la responsabilidad que se demanda, tienen además el carácter de violación a los derechos humanos, delito de lesa humanidad, crimen de guerra, u otra calificación concurrente con la de secuestro agravado o torturas, la responsabilidad del Estado debe determinarse asimismo de conformidad con los convenios o tratados internacionales, las reglas de derecho internacional que se consideran iuscogens y el derecho consuetudinario internacional, sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, cuyo artículo 27 dispone que "el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales" y que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete su responsabilidad internacional (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, "Las Constituciones Latinoamericanas", página 231).

Fluye de todo lo ya señalado que el Estado de Chile debe responder por el perjuicio que han ocasionado funcionarios del Ejército de Chile(sic) actuando en su calidad de tal, puesto que se dan todos los supuestos necesarios para determinar el perjuicio moral sufrido por los actores.



Por todo ello, se demanda al Fisco de Chile, por daño moral, como consecuencia directa del secuestro y torturas de que fueron objeto, el pago de doscientos millones de pesos (\$200.000.000), suma que deberá ser pagada con reajustes de acuerdo al IPC e intereses legales desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago, más las costas del juicio; o en su defecto el monto indemnizatorio que estime de conformidad con su apreciación y valorización del daño.

A folio 6 comparece Ruth Israel Lopez, contestando por el Fisco de Chile, oponiendo como primera cuestión, la **excepción de reparación satisfactiva**; esgrimiendo la improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizados, exponiendo latamente, el marco general sobre las reparaciones otorgadas, agregando que las negociaciones entre el Estado y las víctimas, revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras, radicadas en grupos humanos más específicos; concurso de intereses que se exhibe normalmente en la diversidad de contenidas que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación; programas que incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas, diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero.

Señala que dentro de los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del Presidente Patricio Aylwin, se encuentra la provisión de reparaciones para todos los afectados, respecto de la cual, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, también llamada "Comisión Rettig", en su Informe Final propuso una serie de "propuestas de reparación", entre las cuales se encontraba una **pensión única de reparación** para los familiares directos de las víctimas, y algunas prestaciones de salud. Dicho informe, sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente envió al Congreso, que derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; cuyo mensaje fue claro, al expresar que por él se buscaba, en



términos generales, "**reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de víctimas**", a que se refiere su artículo 18.

Asumida esta "idea reparatoria", tanto la Ley 19.123 y las demás normas conexas, como por ejemplo la Ley 19.992, referida a las víctimas de tortura, han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado la compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica como nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.

Así, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) reparaciones simbólicas; mediante los cuales se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que lo que busca no es otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

En la especie, el actor ha recibido beneficios pecunarios por la ley N° 19234 Y 19992 y sus modificaciones, que estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo "Listado de Prisioneros Políticos y Torturados" de la nómina de personas reconocidas como víctimas. Agrega que a los beneficiarios, tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, les fue concedido el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en servicios de salud del país, agregando que también se les otorgaron beneficios educacionales, consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores, a través de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación; y asimismo, beneficios en vivienda.



De lo expuesto, sostiene que puede concluirse que los esfuerzos realizados por el Estado para reparar a las víctimas de DD.HH han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones razonables a nuestra realidad financiera; escenario en el que tanto la indemnización que se solicita en autos, como el cúmulo de reparaciones hasta ahora aludidas, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos, de lo que resulta concluir que los referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños, no pudiendo ser, entonces, reparados nuevamente; citando jurisprudencia relativa a tal situación; motivo por el cual, en definitiva, **opone la excepción de reparación integral**, por ya haber sido indemnizados.

En subsidio de la excepción anterior, **opone la prescripción extintiva de la acción**, con arreglo, en primer lugar, a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo texto, solicitando en consecuencia que, por encontrarse prescrita la acción, se rechace la demanda en todas sus partes.

Según el relato efectuado por el demandante, la detención ilegal, privación de libertad y tortura que sufrió aquél, ocurrieron a partir del 11 y 20 de julio de 1988; entonces, aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en Septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, **el 13 de noviembre de 2019**, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil; motivo por el cual opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en dicha norma.

En subsidio, y para el caso de que el Tribunal estime que dicha norma no es aplicable al caso de marras, **opone la excepción de prescripción extintiva** de 5 años,



contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514, del ya citado código; debido a que, entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil de marras, transcurrió también con creces, el plazo pertinente.

Posteriormente, realiza un lato análisis relativo a la prescripción en lo referente a la materia de autos, haciendo presente que no existe norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, por lo que debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual (artículo 2332); agregando que el plazo debe contarse, en la especie, no desde la detención del demandante, sino que desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia; haciendo presente además que numerosa jurisprudencia sobre la materia reiteran tal circunstancia.

Indica que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que cabe aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece, como se dijo, al ámbito patrimonial; reforzando su planteamiento, señalando que basta considerar que el derecho a indemnización puede ser, y ha sido, objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (inclusive en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

Por otro lado, sostiene que de determinados instrumentos internacionales, en ninguno se contempla la



imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en la materia; haciendo presente que dichos instrumentos, tales como la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad", los "Convenios de Ginebra", la "Resolución N° 3.074, de fecha 3 de Diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas", y la "Convención Americana de Derechos Humanos", establecen imprescriptibilidad para las acciones penales.

En subsidio de las defensas planteadas, y en cuanto al daño e indemnización reclamadas, formula las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y del excesivo monto pretendido; señalando que la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta excesiva, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile y los montos promedios fijados por nuestros Tribunales de Justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

En subsidio de las excepciones previas, indica que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos por el actor de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación (N°19.234 y 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que, por lo demás, "seguirá percibiendo a título de pensión", como también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales; haciendo presente que, de no accederse a tal petición subsidiaria, implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo que contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Seguidamente, alega la improcedencia del pago de reajustes e intereses, por cuanto los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la



causa acoja la demanda y establezca la obligación y además desde que la sentencia se encuentra firme o ejecutoriada; y en cuanto a los intereses, señala que conforme al artículo 1551 del Código Civil, el deudor no está en mora sino hasta cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia; cuestión que así ha establecido la jurisprudencia, de manera uniforme; motivos por los cuales los reajustes e intereses, sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentra firme o ejecutoriada y su parte incurra en mora.

A folio 9, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, reitera todos los argumentos de hecho y derecho aludidos en el libelo de demanda.

En cuanto a la **excepción de pago** opuesta por el demandado, solicita su rechazo, por cuanto el reconocimiento del derecho a pedir una reparación se encuentra implícitamente reconocido por el Estado y que en tal sentido cabe rechazar la excepción de pago invocada por el Consejo de Defensa del Estado por no corresponder, las reparaciones otorgadas, a la naturaleza de la indemnización de perjuicios alegadas en este juicio por cuanto no son incompatibles.

Respecto de la **excepción de prescripción extintiva,** sostiene en síntesis, que el juicio trata de un delito de lesa humanidad y que no son aplicables a su respecto la prescripción extintiva de las acciones civiles, siendo, por tanto, imprescriptible la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad cometidos con la activa colaboración del Estado.

Por último, agrega, en relación al monto de la indemnización solicitada ella se estiman pertinente en virtud del daño ocasionado, esto es, a la extrema violencia de que fueron víctimas sus representados, y las torturas a que fueron sometidos cuyas graves secuelas físicas y psíquicas perduran hasta el día de hoy y que deberá ser el sentenciador quién resuelva lo que estime en virtud de los méritos del proceso y la equidad.



A folio 11, el demandado evacuó el trámite de la dúplica, ratificando las argumentaciones expuestas en su contestación de demanda.

A folio 13, se recibió la causa a prueba.

A folio 52, se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como se dijo, LUIS PÉREZ CAMOUSSEIGHT abogado, en representación judicial de Jorge Alberto Peralta Guerra deduce demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, en contra del **FISCO DE CHILE**, representado legalmente por doña María Eugenia Manaud Tapia, en su calidad de Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, y con la cual pretende se acoja la demanda, por haber sido sometido a detención, prisión ilegal, torturas y apremios ilegítimos, **entre el 16 y 20 de julio de 1988** y se condene al demandado a la reparación y pago de la cantidad de **\$ 200.000.000.-** por daño moral o las cantidades que en derecho se determine, con los reajustes e intereses correspondientes, más costas.

Funda su pretensión en los argumentos ya explicitados en la expositiva, que por economía procesal, se tienen por reproducidos para todo efecto legal.

SEGUNDO: Que, el Fisco de Chile contestó la demanda, conforme las alegaciones y defensas debidamente reseñadas en la expositiva, que por economía procesal, se tienen por reproducidos para todo efecto legal.

TERCERO: Que, a objeto de acreditar sus alegaciones, la parte demandante se valió de los siguientes medios probatorios:

I.- DOCUMENTAL: (folio 32, 34, 40)

1.- Certificado de salud de don Jorge Peralta Guerra evacuado por el PRAIS de Melipilla, siéndole realizada la evaluación en el mes de Octubre del año 2020.

2.- Artículo titulado "Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, elaborado por el Programa de Salud Mental de la



Vicaría de la Solidaridad e incorporados en los autos rol C-22.561-2018, del 28° Juzgado Civil de Santiago, seguidos por la misma materia.

3.- Artículo titulado "Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico - psiquiátrico" del mes de julio del año 1978, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.

4.- Artículo titulado "Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980. Su impacto psicológico" del mes de julio del año 1980, elaborado por el programa de salud mental de la Vicaría de la Solidaridad.

5.- Artículo titulado "Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos" del mes de Abril del año 1987, suscrito por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad.

6.- Artículo titulado "Salud Mental y violaciones a los Derechos Humanos" del mes de junio del año 1989, suscrito por el Dr. Andrés Donoso, Dr. Guillermo Hernández, Ps. Sergio Lucero, Dr. Ramiro Olivares y Aux. Enf. Janet Ulloa, del equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad.-

7.- Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Valech 1

8.- Copia autorizada de antecedentes de carpeta de don Jorge Alberto Peralta Guerra del Instituto Nacional de Derechos Humanos, presentados ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

9.- Nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech 2, en el que Jorge Alberto Peralta Guerra figura bajo el número 6.653.

10.- Certificado Psicológico y Social del actor evacuado por el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, de fecha 17 de Septiembre de 2020.

CUARTO: Que, el demandado solo rinde como probanza oficio respuesta del Instituto de Previsión Social Ordinario N° 62665/2019, que da cuenta que el demandante recibe pensión



de reparación por ley N°19.992 y bono ley N° 20.874, recibiendo a la fecha la suma de \$17.556.979

QUINTO: Que, son hechos de la causa, por no haber sido objeto de controversia, que se encuentran además acreditados con el mérito del documento reseñado en el motivo anterior, los siguientes:

1.- que el actor Jorge Peralta, militante del partido comunista fue detenido el día 16 de julio de 1988 a la salida de Metro cuando se dirigía a una reunión sindical, por funcionarios de Carabineros, trasladado a una comisaría, donde fue interrogado y golpeado. Fue liberado el día 20 de julio del mismo año.

2.- Que el demandante se encuentra reconocido como persona víctima de violación de derechos humanos como preso político y torturado, pensionado a raíz de su incorporación a los Informes de la Comisión Valech.

SEXTO: Que, el 11 de Noviembre de 2003, transcurridos **13 años** desde que se restableció el Estado de Derecho en nuestro país, durante el gobierno del Ex Presidente, S.E Ricardo Lagos Escobar, se dictó el Decreto N° 1040, mediante el cual se creó la "Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el Esclarecimiento de la Verdad acerca de las Violaciones de Derechos Humanos en Chile", cuyo objetivo, de acuerdo a las palabras del propio gestor, fue determinar el universo de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, entre Septiembre de 1973 y Marzo de 1990; que se materializó en un Informe que consta de más de 500 páginas, elaborado con 28.000 testimonios de considerados válidos (se recibió testimonio de 35.865 personas, residentes en Chile como en el extranjero); de los que, con la debida prudencia y cautela, se deja constancia en el mismo informe, sin individualizar nombres ni algún otro dato personal, sino únicamente el sexo del declarante, y el lugar en que fue detenido.

Conjuntamente con el informe, la Comisión elaboró un listado con los nombres de las personas a quienes se les reconoció la



calidad de Presos Políticos y Torturados, con un total de **27.153** personas.

SÉPTIMO: Que, posteriormente, y con ocasión del resultado de la labor de la Comisión, fue dictada la Ley N° 19.992, publicada con fecha 24 de Diciembre de 2004, que "Establece Pensión de Reparación y Otorga otros Beneficios a Favor de las Personas que indica", cuyo artículo primero, contenido en el Título I "De la pensión de reparación y bono", dispone: *"Establécese una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de Prisioneros Políticos y Torturados", de la Nómina de personas reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior."*

El artículo segundo, establece que la pensión anual aludida, ascendería a **\$1.353.798.-**, para aquellos beneficiarios menores de 70 años de edad; a **\$ 1.480.284.-** para aquellos beneficiarios mayores de 70 o más años pero menores de 75 años; y a **\$ 1.549.422.-**, para aquellos beneficiarios de 75 o más años de edad; pensión que se pagaría en 12 cuotas mensuales de igual monto, reajutable conforme lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979, o en las normas legales que reemplacen dicha disposición.

Su inciso segundo, establece que la pensión referida, sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quiénes se encuentren en tal situación optar por uno de estos beneficios en la forma que determine el Reglamento; precisando que las personas que ejercieran dicha opción, tendrían derecho a un bono de **\$ 3.000.000.-**, el que se pagaría por una sola vez dentro del mes subsiguiente de ejercida la opción.

El artículo séptimo, dispone que tanto la pensión como el bono establecidos, se devengarían a partir del primer día del mes subsiguiente a la fecha en que los beneficiarios



presenten sus solicitudes, las que podrían ser solicitadas desde la publicación de la misma (ley).

OCTAVO: Que, por otro lado, mediante la Ley N° 20.874, publicada con fecha 29 de Octubre de 2015, que "Otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile", de acuerdo a su artículo primero, se otorgó un aporte único en carácter de reparación parcial, de **\$ 1.000.000.-**, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente.

El inciso tercero, dispone que: *"Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura."*

NOVENO: Que, tal como consta del documento reseñado en el motivo cuarto, el demandante detentan la calidad de "Preso Político y Torturado", constando en autos que percibe en virtud de tal calidad, al mes de diciembre de 2019, la suma de **\$ 17.556.979 por concepto de pensión de reparación.**

DÉCIMO: Que **la excepción de pago (reparación integral)** opuesta por el Fisco de Chile se ha fundado, como ya se dijo, en que Jorge Peralta ya ha sido indemnizado, en razón de haber recibido beneficios por el cúmulo de acciones reparatorias resultando en consecuencia improcedente ser indemnizado por daños cuya génesis radica en idénticos hechos será desestimada como se dirá a continuación.

DECIMOPRIMERO: Que, al respecto, cabe aplicar los argumentos esgrimidos por la Excm. Corte Suprema, en orden a que el hecho de reconocer el Estado la condición de "Preso Político y Torturado" constituye un acto unilateral, y sus



efectos, como en la especie lo es el pago de la pensión a las víctimas, no resulta posible entenderlos como una "indemnización", como pretende el Fisco al sostener su excepción de pago o reparación integral, ya que, de aceptarse tal circunstancia, daría lugar a entender que lo que el Estado de Chile pretendió al crear la "Comisión Valech" fue, con el mérito de sus resultados, en estricto rigor, efectuar una "transacción" con cada uno de los beneficiados, para así precaver la interposición de una acción como la de marras; cuestión que no aparece del tenor literal de la ley, ni tampoco de su espíritu, toda vez que en ella se establece que la pensión sería incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encontraren en tal situación optar por uno de dichos beneficios en la forma que determine el Reglamento; situación de la que resulta entonces concluir que, no obstante ser el demandante beneficiario de la pensión otorgada por el Estado, en su condición de "preso político torturado", tal hecho no era óbice para que interpusiera la acción civil pertinente, como lo ha hecho mediante la demanda de marras; motivos todos los cuales conducen a **desestimar la excepción de pago (reparación integral)**.

En efecto, este derecho de las víctimas y sus familiares encuentra su fundamento en los principios generales de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, la consagración normativa, en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Carta Fundamental, y por ende es obligación del Estado reparar todo daño que se haya ocasionado.

DECIMOSEGUNDO: Que, en subsidio de la excepción razonada previamente, el demandado opuso la **excepción de prescripción** de la acción, fundado en los argumentos ya explicitados en el presente fallo.

Ante tal alegación, cabe tener presente que, fluye del artículo quinto de nuestra Constitución, el ejercicio de la



soberanía se realiza por el pueblo a través del plebiscito y también, se realiza por las autoridades que la misma Carta establece.

Dicho ejercicio, reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; y es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Dicha disposición constitucional, hace posible incorporar al derecho nacional las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales, tales como la de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos; que, en consecuencia, adquiere rango constitucional.

DECIMOTERCERO: Que, la Excma. Corte Suprema, en los autos Rol **22.856-2015**, de fecha 29 de Diciembre de 2015, ha señalado que, *"tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie-, cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la correlativa acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contempladas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional, en armonía con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que insta el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que, en virtud de la ley N° 19.123, reconoció en forma explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de aquellos calificados como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, regalías de carácter económico o pecuniario. En esta línea discurren también SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2105; 1.424, de 1 de abril de 2014;*



22.652, de 31 de marzo de 2015, N° 29448-2018, de 27 de agosto de 2019, entre otras.

Por ende, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad indispensables en un Estado de derecho democrático. Entonces, pretender el empleo de las disposiciones del Código Civil en la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, como derecho común supletorio a todo el régimen jurídico, hoy resulta improcedente.

Por lo demás, la reparación integral del menoscabo no se discute en el plano internacional, ni se circunscribe a los autores de los crímenes exclusivamente, sino también se prolonga hacia el mismo Estado. La preceptiva internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, desde que, sin duda, siempre ha existido, con evolución de las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho violentado."

Tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, no parece consistente ni coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas de prescripción establecidas en la legislación interna pues aquello contraría la voluntad expresa manifestada en la normativa internacional sobre Derechos Humanos e incluso reconocida en las Leyes N° 19.123 Y 19.992 que reconoce de manera explícita la existencia de daños y concedió beneficios económicos, por lo que otorgarles un trato desigual es discriminatoria y el ordenamiento jurídico no lo permite.

Por todo lo expuesto, la excepción de prescripción será desestimada; misma suerte que correrá la excepción de prescripción subsidiaria, por encontrar ésta, de igual manera, su fundamento en normas de derecho interno, que, como ya es claro, no son aplicables al caso de autos.



DECIMOCUARTO: Que, habiéndose desestimado la prescripción de la acción civil, cabe ahora pronunciarse **sobre la procedencia de la indemnización pretendida.**

Como ya se encuentra acreditado, y sin ánimo de agotar el asunto, Jorge Peralta detenta la condición de "Preso Político y Torturado", detención que es del todo plausible sostener, se debió al hecho de haber sido, a la época, militante del Partido comunista y dirigente sindical, como así se señala en su demanda.

Siendo tales circunstancias aquellas que motivaron la detención y posterior tortura, física y psicológica; es pertinente señalar que los actos ejercidos por agentes del estado en su persona, debieron necesariamente afectar su estado emocional, de manera inmediata y durante el período en que estuvo detenido, sin perjuicio que fue de corto tiempo (solo 4 días)

Para determinar el monto del daño, es necesario hacer presente que los informes de trabajo social y de salud mental de folio 32 son genéricos en cuanto a las consecuencias de los detenidos y torturados con anterioridad a la fecha de ocurrencia de estos hechos y en ninguna parte se relacionan con el actor. Por su parte, los informes psicológicos acompañados, sin bien advierten del nivel de angustia, no son de todo precisos ni certeros del nivel de sufrimientos del actor, para justificar la alta cifra que solicita en su demanda.

Por lo expuesto, esta sentenciadora concluye que si bien dicha situación produjo daños que es necesario reparar por cuanto es deber del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana como son la integridad física y psíquica, es necesario considerar el monto que ya ha recibido de parte del Estado.

DECIMOQUINTO: Que, con la documental rendida por la parte demandante en su oportunidad, se puede establecer que está reconocida su calidad de "Preso Político y Torturado" (Nómina de personas reconocidas como víctimas, del informe de



la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, donde ocupa el lugar N° 6653) y en dicha condición es posible advertir que una persona que es detenida e interrogada con golpes sufre angustia y daño emocional que deben ser reparados.

DECIMOSEXTO: Que, en consecuencia, encontrándose acreditado el hecho que el actor sufrió daños debido a la detención y torturas, un daño que sólo se puede enmarcar dentro de aquél denominado "moral"; por otro lado, teniendo presente los montos que percibe o ha percibido el demandante en su calidad de "Preso Político y Torturado", hace igualmente plausible acoger la demanda, condenándose al Fisco de Chile, a pagar a su favor la suma única y total de \$ **10.000.000, (diez millones)**, que se estima justa y equitativa, considerando como se ha dicho que actualmente es, ha sido y será beneficiario de las leyes de reparación respectivas ya indicadas.

El monto indemnizatorio fijado previamente, deberá pagarse debidamente reajustado entre la fecha del presente fallo y aquella en que se haga el pago total y efectivo; más los intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no reajustables, devengados durante el mismo período.

DECIMOSEPTIMO: Que, atendido lo dispuesto en el artículo 144 del Código del Procedimiento Civil, no habiendo sido totalmente vencido y estimando que tuvo motivo plausible para litigar, el Fisco no será condenado en costas.

Por estas consideraciones, y visto además, lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 254, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; el Decreto 1040, de 26 de Septiembre de 2003, la Ley 19.992 y la Ley 20.874;

SE DECLARA:

1.- Que **se rechazan** las excepciones opuestas por el demandado;

2.- Que **se acoge** la demanda intentada a folio 1, y se condena al Fisco de Chile a pagar a **Jorge Alberto Peralta**



C-29421-2019

Guerra, la suma única y total de **\$10.000.000**, en la forma señalada en el motivo décimo sexto.

3.- Que, **no** se condena en costas al demandado, atendido que tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese y notifíquese, y elévese en consulta si no se apelare.

ROL C-29421-2019.

DECTADA POR ISABEL MARGARITA ZUÑIGA ALVAYAY, JUEZA TITULAR DEL PRIMER JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, siete de Marzo de dos mil veintidós**

